

Elecciones y legitimidad democrática en América Latina

Fernando Mayorga
(compilador)



**Elecciones y legitimidad democrática
en América Latina**

Fernando Mayorga
(compilador)

Elecciones y legitimidad democrática en América Latina



CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Secretario Ejecutivo: Pablo Gentili

Directora Académica: Fernanda Saforcada

Programa Grupos de Trabajo

Coordinador: Pablo Vommaro

Asistentes: Lluvia Medina, Valentina Vélez Pachón, Rodolfo Gómez y
Giovanny Daza

Área de Acceso Abierto al Conocimiento y Difusión

Coordinador Editorial: Lucas Sablich

Coordinador de Arte: Marcelo Giardino

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

EEUU 1168 | C1101 AAx Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145/9505 | Fax [54 11] 4305 0875 | e-mail clacso@clacso.edu.ar | web www.clacso.org

CLACSO cuenta con el apoyo de la Agencia 
Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) 

Este libro está disponible en texto completo
en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

© Fernando Mayorga, 2016

© CESU-UMSS / CLACSO / IESE / Plural editores, 2016

Primera edición: agosto de 2016

DL: 4-1-1261-16

ISBN: 978-99954-1-720-8

Producción:

Plural editores

Av. Ecuador 2337 esq. c. Rosendo Gutiérrez

Teléfono: 2411018 / Casilla 5097 / La Paz, Bolivia

e-mail: plural@plural.bo / www.plural.bo

Impreso en Bolivia

Índice

Prólogo	7
Presentación	9

I

LA DEMOCRACIA DESPUÉS DE LOS PROCESOS ELECTORALES

Crisis de representación, movilizaciones sociales y elecciones presidenciales 2013 en Chile <i>Manuel Antonio Garretón M.</i>	15
Eleições, radicalização política e revolta social: uma análise do Brasil entre as eleições de 2014 e os panelaços de 2015 <i>Leonardo Avritzer</i>	39
Elecciones presidenciales en México 2012: crisis del Estado y restauración precaria <i>Alberto J. Olvera</i>	59
El ciclo electoral del 2014 en Uruguay. ¿Todo igual? <i>Gerardo Caetano y Lucía Selios</i>	95
Rafael Correa y la muerte lenta de la democracia en Ecuador <i>Carlos de la Torre</i>	139
Venezuela: la crisis política del postchavismo <i>Margarita López Maya</i>	165

Bolivia: ciclo electoral 2014-2015 y mutaciones en el campo político <i>Fernando Mayorga</i>	205
Elecciones 2014 en Costa Rica: El “cambio”... de las urnas al gobierno <i>Ciska Raventós Vorst</i>	235
La representación electoral sub-nacional en el Perú (2002-2014): ¿fragmentación o regionalización de la política? <i>Aldo Panfichi y Juan Dolores</i>	257

II

DEMOCRACIA, LEGITIMIDAD
Y REPRESENTACIÓN

Democracia continua: representación y auto representación <i>Isidoro Cheresky</i>	283
Entre la gestión y la negatividad. Aportes para una conceptualización de las nuevas formas no electorales de participación <i>Rocío Annunziata</i>	313
Las tensiones irresueltas de la representación <i>Oswaldo Iazzetta</i>	343
La controvertida democracia representativa <i>Hugo Quiroga</i>	367

Democracia continua: representación y auto representación

*Isidoro Cheresky**

El régimen político de democracia liberal en sentido estricto, y en un sentido más amplio las relaciones sociales en los diferentes ámbitos, se hallan en mutación. Es decir que la relación gobernantes-gobernados y también el alcance de los principios constitutivos de la modernidad, la igualdad, la libertad y la fraternidad en la cotidianeidad civil, están experimentando modificaciones significativas y durables en Occidente –para emplear un término antiguo e impreciso–. Y ello es particularmente cierto en lo que es el foco de este escrito, América Latina. Sin duda, los regímenes políticos y las democracias en particular son tipos ideales y en las realidades nacionales coexisten diferentes articulaciones; de modo que el argumento que aquí se expone tiene foco en lo que emerge y –en grados variables según los casos– va adquiriendo centralidad.

Por sobre la diversidad de matices e intensidades en cada caso nacional, se pueden reconocer rasgos comunes de un formato que

* Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y Docteur de la Université de Toulouse le Mirail, Francia. Profesor titular de Teoría Política Contemporánea y Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA) y desarrolla actividades docentes en universidades nacionales y del exterior. Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como director del proyecto sobre “Ciudadanía e instituciones políticas”. Ha escrito y editado numerosos libros sobre Argentina y América Latina.

se expande en América Latina, un régimen político de “democracia continua”, diferenciándola de la democracia representativa tradicional.

No es el caso exponer los rasgos específicos del contexto latinoamericano y la diversidad que ofrecen los diferentes países, sin embargo cabe sí mencionar que en el pasado han predominado, en muchos de ellos, las dictaduras militares y la inestabilidad política, aunque las Constituciones enunciaran la institucionalidad democrática. Esa paradoja de una institucionalidad como “mascarada” ha marcado los dilemas que emergieron en la primavera democrática –en los años ochenta– en América Latina. Desde ese entonces, la mutación democrática ha reactivado las tensiones entre enunciados constitucionales y prácticas políticas y sociales, puesto que los dispositivos de la democracia convencional tal como se habían consolidado –relativamente, es cierto– en las democracias del Norte, en América Latina no se habían cristalizado o eran deficientes, por lo que el desafío en ese entonces no consistía en una recuperación de la democracia –que solo en unos pocos países había tenido alguna vigencia en el pasado–, sino en buena medida en una perspectiva de instalación, y para ello el reconocer los principios de los derechos humanos y el pluralismo político y social era clave. Abordar una tarea amplia para palear el “déficit republicano” requiere, por cierto, dar consistencia al Estado de derecho, pero también a las costumbres cívicas afines.

Pero al mismo tiempo que se encaraba vigorizar a instituciones débiles o aún carentes de la imparcialidad necesaria para no ser tributarias de las desigualdades sociales, se percibía otro desafío: los signos de una mutación hacia otro tipo de democracia –distinta de la que se consideraba el modelo auténtico–, que Pierre Rosanvallon nombra como democracia post representativa. Esa democracia en mutación era perceptible en los países democráticos del hemisferio norte, descongelados en su vida política por la caída del muro de Berlín, ícono de la desarticulación de la bipolaridad Este-Oeste y desencadenante de la accidentada democratización en países del Este. Además, en este orden de cosas, referirse a las transformaciones sociológicas derivadas de la globalización y de

la expansión de sociedades post industriales, siendo ya un lugar común, es ineludible, pues reconsidera el marco más acotado para las identificaciones político partidarias, para las políticas nacionales y para la intervención del Estado.

Otro factor es la modificación de la geografía económica y del comercio mundial que ha sido favorable —a inicios del siglo XXI por la expansión de la demanda de bienes primarios, y ulteriormente por la de las industrias extractivas “en provecho” de los países andinos y del Pacífico— con el consiguiente crecimiento del producto interno y la posibilidad de políticas sociales redistributivas y de estrategias de crecimiento de una producción nacional variada. Ello ha permitido un mayor margen de maniobra para los gobiernos y aún para la imaginación de alternativas por parte de los opositores. En varios países, especialmente los agro-exportadores, recientemente este ciclo favorable ha declinado por influencia de la crisis económica iniciada en 2008 en los países del Norte y por la disminución del crecimiento de los países asiáticos, compradores de materias primas en la región.

Teniendo en cuenta esa variedad de condicionantes, debe recordarse que la democratización en Latinoamérica desde los años ochenta procuraba anclarse en un sustento básico, el de las elecciones como único origen de gobernantes legítimos, lo que requería desplazar a los poderes corporativos de su pretensión de erigir o condicionar el gobierno político, y asegurar la estabilidad de esos gobernantes. Se trataba de replegar las fuerzas armadas a su rol profesional, pero también al mundo de los negocios y, en algunos casos, a las corporaciones sindicales que en el pasado habían posibilitado y aún colaborado e incitado la instalación de gobiernos de facto. El renacimiento de los partidos políticos parecía destinado a suministrar los recursos de las por entonces predicadas “transición” y “consolidación democrática”, pese a que las dictaduras y la inestabilidad habían tenido también a una parte de los políticos profesionales como sostenes o al menos como interlocutores.

Un giro pro democrático se abría entonces paso en la región. Pero éste no siguió el curso esperado e indicado por los cánones

construidos en el mundo académico o incluso predicado por los actores políticos y sociales afines a él. Y ello no es sorprendente, pues por ese entonces el régimen político democrático estaba conmovido allí mismo donde se habían generado las revoluciones de la modernidad en el siglo XVIII; las instituciones heredadas y particularmente el sistema representativo europeo experimentaban una metamorfosis en beneficio de la informalidad política.

De este modo la desinstitucionalización y particularmente la expansión de una ciudadanía poco afín a las adscripciones partidarias acarrea la recomposición del sistema representativo electoral —es decir la reconfiguración de las escenas de competencia por la representación—, poniendo en primer plano los liderazgos de popularidad por sobre la influencia y capacidades de las redes partidarias, y habilitándose también la emergencia de “espacios políticos” y partidos ciudadanos con orígenes y modalidades de deliberación y decisión asamblearias, procurando así ser cuestionadores de la representación tradicional y renovadores de la política.

El sistema representativo electoral persiste entonces como un eje del régimen político pero no es el único, y está más limitado en sus capacidades, y ello en provecho de los “poderes indirectos”, formales e informales, instalados en el espacio público con atribuciones *de facto* de imparcialidad o de reflexividad apreciados por la ciudadanía, por lo que adquieren un rango representativo con frecuencia estable y paralelo al de los representantes electos.

En América Latina se constata una evolución política afín con la designación de democracia post representativa que, desde la perspectiva aquí adoptada, puede nombrarse como democracia continua. Y, específicamente, la disociación entre el ámbito del sistema representativo y de la clase política, incluyendo los liderazgos de popularidad y las redes organizacionales, y el espacio público, “hábitat” de representaciones no electorales y de la ciudadanía autonomizada. Ciudadanía que es fluctuante en su figuración como opinión pública, electorado y movimiento de protesta y veto hacia decisiones de los gobernantes y parlamentarios deviniendo así un componente central y continuo (es decir que va más allá del momento electoral) del régimen político. El descontento tanto

pasivo como activo con gobernantes muy populares como Michelle Bachelet, Dilma Roussef, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y aún Nicolás Maduro ilustra esa ciudadanía alerta que atribuye popularidad a líderes nacionales, pero no es cautiva sino fluctuante y no se alinea automáticamente con los candidatos locales o con los sucesores. Es muy crítica hacia los privilegios de la clase política, considerando insoportable el ejercicio arbitrario del poder y la corrupción que, en algunos casos, alcanza también a gobiernos que han obtenido reconocimiento en mérito a su acción reformista. La opinión pública y la movilización ciudadana ponen límite a los gobernantes, y requieren rectificaciones sin esperar a ejercer un pronunciamiento por el voto. En los regímenes de intenciones refundacionales, la protesta puede constituir un polo ciudadano activo, hasta cierto punto por fuera de la oposición política institucional, como en Venezuela, o bien expresar su diversidad y favorecer el pluralismo en elecciones regionales o municipales a contracorriente de la pretensión de los presidentes, algunos de ellos recientemente convalidados, como en Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil, los que han tendido a considerar que sus mayorías absolutas en las elecciones que los consagraron avalan su pretensión de identificación definitiva con el pueblo y la nación.

Poder presidencial concentrado confrontado por protestas y vetos ciudadanos

Con características distintas, varios países de Latinoamérica han experimentado cambios de rumbo político con variedad de estilos e intensidad reformista.

Un rasgo común a ellos es que se han iniciado con liderazgos de popularidad, alcanzando éstos la Presidencia sustentados en una relación directa con la ciudadanía. Aunque en algunos casos cuentan con el apoyo de partidos y redes consistentes, el liderazgo, con los matices apuntados, es personalista.

Sin embargo, el ejercicio del poder concentrado ha encontrado un obstáculo y una contrapartida en una ciudadanía, en algunos

casos, parcialmente organizada y generalmente movilizada de un modo espontáneo en manifestaciones, estallidos y vetos.

Esta escena –poder presidencial versus movilización ciudadana– ha sido característica de regímenes políticos en los que las instancias institucionales (congreso, sistema judicial y partidos políticos) se han debilitado. La acción a veces se ha traducido eficazmente en el congelamiento de decisiones cuestionadas y ha tenido amplio eco en las elecciones.

Los liderazgos de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador ilustran una variante: consagración electoral reiterada del liderazgo presidencial coexistiendo con protestas ciudadanas y populares que si aún no erosionan la popularidad presidencial, redundan en la derrota de los oficialismos a nivel local.

En Bolivia, Evo Morales en su segunda reelección en 2014 había conquistado la Presidencia con el 61% de los votos y alcanzando una mayoría de dos tercios en el Congreso. De ese modo, por tercera vez, el líder presidente consagraba su poder institucional nacional otorgando verosimilitud a la proclamada “Agenda Patriótica 2025”, es decir la permanencia en el poder de su instrumento político y quizás de él mismo, en un contexto de oposiciones fragmentadas. Pero las elecciones de gobernadores y alcaldes en 2015 dieron cuenta de una fluctuación considerable del electorado, pues de las diez principales ciudades ocho fueron conquistadas por la oposición, incluyendo entre ellas La Paz y El Alto e incluso la gobernación del departamento de La Paz. Algunos analistas han interpretado este resultado como confirmación de que el núcleo sólido del Movimiento al Socialismo (MAS) es básicamente rural y provincial. Los triunfadores en algunas de las grandes ciudades son personas de extracción indígena o campesina pero que evitan confrontar con el líder nacional, lo que junto con la emergencia de líderes decididamente opositores daría cuenta de diferentes formas de autonomía en los ciudadanos y las comunidades, que ilustrarían un nuevo pluralismo ajeno a la vocación hegemónica.

En Ecuador, Rafael Correa es como otros líderes que llegaron al poder por fuera de los partidos tradicionales y con un programa

de reforma, un líder de popularidad reelecto en 2013 con un amplio respaldo, el 57,17% de los votos, y ante una oposición variada y fragmentada. Como en Bolivia, se registra la emergencia de un nuevo pluralismo ilustrado en las elecciones regionales de 2014 por el triunfo en grandes ciudades y prefecturas de opositores y de aliados disidentes –Avanza, partido socialista ecuatoriano–. Y en este caso también el voto oficialista nacional se concentra en zonas rurales. De modo que Alianza País retiene tres de las veinticuatro capitales provinciales y diez de veintitrés prefecturas.

Un foco de cuestionamiento a la “Revolución Ciudadana” proviene de las poblaciones que se oponen a la explotación minera y petrolera, al menos en los términos en que se lleva a cabo. A ello se añade un descontento –con epicentro urbano– por el modo de gobernar de una fuerza política oficialista que se estructuró a partir del control del aparato del Estado. Un tema relevante de ese descontento se motiva en decisiones con poco diálogo y argumentación –aunque ante las protestas en 2015 Correa parece haber iniciado una apertura–, y en ciertas restricciones severas a los medios de comunicación.

En Argentina y Brasil las crisis derivadas de la movilización ciudadana y popular han sido más intensas y más nítida la repercusión en el gobierno y el sistema representativo.

En ambos países, como en los andinos ya mencionados, en la década pasada se ha registrado un ciclo de crecimiento económico y de políticas distributivas asociadas y en parte atribuidas a una nueva elite política gobernante. La renovación ha sido más notoria en el caso brasilero, pues hace más de una década llegó al gobierno un partido de los trabajadores –el PT– inicialmente promovido por sindicalistas y comunidades eclesíásticas de base, en tanto que en Argentina se trata de un movimiento que incluyó buena parte del dispositivo organizacional peronista, aunque con dirigentes de vocación fundacional, que introdujo fracturas en los tributarios de esa tradición.

El modo de gobernar ha sido notoriamente diferente. En el caso argentino pese a los vaivenes y etapas diferentes a lo largo del ciclo –2003/2014– predominó un ejercicio concentrado y

decisionista del poder que procuró primar por sobre toda diferenciación de autoridad en el Estado, y una hostilidad hacia el debate público y las fuerzas políticas opositoras, y en eso se asemejaba a los regímenes refundacionales del área andina. En Brasil en cambio, aunque el liderazgo de popularidad con Lula fue notorio e incluso aseguró el éxito de la primera presidencia de su sucesora con una transferencia de ese crédito de confianza ante la ciudadanía, el oficialismo tenía otra vertiente en un consorcio parlamentario con un *partenaire* principal –el PMDB– y una decena de otros partidos pequeños.

El gobierno de los Kichner (primero Néstor y luego Cristina por dos mandatos) congregó un sustento movimientista cuya geometría cambió a lo largo de los doce años. La vertebra de ese gobierno y movimiento fue el vínculo de popularidad cuyo líder alcanzó, superando su precariedad inicial con acciones de gobierno que lo fortalecieron en un contexto de fraccionamiento social y político y de poderes fácticos en pie luego de la debacle de 2001.

Cristina Kirchner sucedió en el poder a su marido en diciembre del 2007. Pese al amago de institucionalización inicial, y luego de la fuerte movilización iniciada por los ruralistas en veto a una decisión gubernamental, se gestó una polarización cuando el oficialismo vio su coalición gobernante debilitarse en el Congreso al punto de perder la votación decisiva referida a los impuestos a las exportaciones para ciertos productos agrícolas. La subsiguiente derrota electoral –en las elecciones legislativas de 2009– redujo el bloque parlamentario oficialista a una minoría y consolidó gobiernos provinciales opositores en grandes distritos: Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

La impotencia de la oposición en constituir alternativas y el contraste con un gobierno de iniciativas permanentes, algunas de ellas bien ponderadas e incluso sostenidas por parte de los adversarios, condujo a una reversión del estado de la opinión que se plasmó en la exitosa reelección de Cristina Kirchner en 2011 con el 54,4 % de los votos

A partir de entonces, como en otros casos de gobiernos de pretensión refundacional se acentuó un modo decisionista de

ejercer el poder en vistas a reformas progresistas entrelazadas con la concentración de decisiones en el ejecutivo y un uso arbitrario de los fondos públicos, que luego serían objeto de denuncias por corrupción junto con el cuestionamiento en la atribución de obras públicas y en las pautas publicitarias en desmedro de la prensa opositora. La concentración de poder se acompañó de estrategias de erosión y enfrentamientos con sectores del poder judicial y en particular con la Corte Suprema.

La expansión del “crisinismo” vigorizó un dispositivo organizacional promovido desde la cúspide del poder político y valiéndose de agencias estatales que proveían puestos y recursos para la acción militante; su vertebra fue la agrupación “La Cámpera”. El “aparato peronista” tradicional, también sustentado en dispositivos estatales (intendencias del conurbano bonaerense y provincias prevaleciendo en muchos casos liderazgos burocráticos que se prolongan de por vida) permaneció relegado ante una radicalización que toleraba en tanto la presidenta contaba con altos índices popularidad.

Los cacerolazos de 2012 e inicios de 2013 anticipaban una reversión de tendencia que fue mas allá del descontento de los sectores urbanos solventes. Las elecciones de renovación parcial del Congreso lo ilustraron, pues las listas del oficialismo obtuvieron un *score* nacional del 32,5% y perdieron categóricamente en los grandes distritos, en particular en el más poblado, la provincia de Buenos Aires. En este distrito pareció surgir una alternativa electoral alimentada por una minoría de intendentes bonaerenses, que contaron con amplio respaldo en ese entonces. Esta derrota, aunque no privó al oficialismo de su mayoría en el Congreso, puso fin a la pretensión de reformar la Constitución para que Cristina Kirchner pudiese aspirar a una segunda reelección, colocando al oficialismo ante la irresoluble búsqueda de un buen sucesor.

En las elecciones 2015 concluye el ciclo kirchnerista, pues ningún heredero de “pura sangre” puede acceder al poder. Un candidato postulado por el oficialismo y largamente resistido en su seno compite con posibilidades de triunfar, pero aún su éxito abrirá una nueva escena. Por cierto, en ella estarán presentes

representantes y actores político-sociales inspirados en la tradición kirchnerista.

Brasil, con estabilidad política y ampliación de reformas y derechos con una reforma constitucional participativa (en 1988) ilustraba en la región estabilidad y progreso. La consagración como presidente, en 2002, de Lula Da Silva, líder del PT, culminaba una inserción exitosa de esa fuerza en el sistema político para lo cual fue modulando sus objetivos reformistas luego de sucesivos traspies en su intento de acceder al poder. Desde el inicio, el liderazgo de popularidad del presidente apareció dissociado del de su partido, minoritario en el parlamento, lo que indujo a alianzas parlamentarias con un abanico variado de grupos que recibían como contraparte una participación en la gestión pública y, como se sabría con el tiempo, retribuciones ilegales. Esas eran las características del “presidencialismo de coalición” que acentuaban un rasgo instalado desde los inicios de la democratización.

Esas características de la coalición parlamentaria coexistían con un liderazgo de Lula muy arraigado, al punto que finalizado sus mandatos logró exitosamente una transferencia de popularidad en beneficio de Dilma Rouseff, quien solo comenzó a experimentar el acoso del descontento popular al final de su primer mandato poniendo en riesgo su reelección, que fue lograda en su momento con el concurso de Lula.

Con el gobierno de Lula, y luego de Dilma Rouseff, hubo una significativa política distributiva durante varios años paralela al crecimiento económico que conllevó una disminución de la pobreza al punto que se ha considerado que su magnitud rediseñó el escenario social. El reconocimiento de los excluidos y recientemente incorporados en la distribución del ingreso hacia el liderazgo reformista se afianzó a la par que las consecuencias de insatisfacción con las políticas públicas y la corrupción precipitaron el desapego de nuevos y viejos “sectores medios”. La protesta iniciada en junio 2013 por un reclamo puntal –un aumento en la tarifa del transporte urbano en Sao Paulo y otras ciudades– catalizó un descontento que se venía gestando por la corrupción en la alianza gobernante revelada en el “mensalao” –pagos regulares

ilegales a algunos de los diputados más reticentes—, y que puso foco en los grandes gastos públicos para que el país albergara el mundial de fútbol y ulteriormente las Olimpiadas. Multitudinarias manifestaciones convocadas por las redes sociales de Internet en las principales ciudades expresaban descontento y reclamos por los déficits en la provisión de bienes básicos (salud, educación).

Como consecuencia de “ese terremoto político” que fueron las manifestaciones que estallaron en junio de 2013, las elecciones presidenciales y generales de 2014 exhibieron una importante fluctuación electoral condicionada por la emergencia de una candidata por fuera de los polos políticos tradicionales. Marina da Silva, líder ecologista que había sido ministra en el gobierno Rousseff, ya había emergido en las elecciones precedentes y en estas llegó a ser candidata presidencial sustituyendo al inicialmente postulado por el partido socialista brasileiro luego de que éste, al inicio de la campaña, falleciera en un accidente. Da Silva a unos meses de las elecciones se proyectaba como posible presidenta, pero en la primera vuelta quedó tercera con el 20% de los votos; Dilma prevaleció en esa elección pero su suerte fue incierta hasta el escrutinio de la segunda vuelta en la que se impuso por escaso margen.

Poco tiempo después de iniciar su segundo mandato se precipitó una crisis política al revelarse una corrupción de proporciones en la gran empresa estatal Petrobras, que involucraba en primer término al gobierno y algunos de sus aliados. La coalición parlamentaria comenzó a debilitarse. En febrero de 2015 la renovación de las Cámaras consagró en la presidencia de las mismas a candidatos del PMDB ajenos a los postulados por el gobierno y luego la rebelión parlamentaria se amplió en un contexto de manifestaciones y declaraciones de políticos pidiendo la destitución de la Presidenta, aunque sin que formalmente se iniciara un trámite institucional ni la principal oposición se pronunciara claramente.

En marzo y abril de 2015 multitudinarias manifestaciones se llevaron a cabo en las grandes ciudades en rechazo a la corrupción y de descontento con los políticos. La reprobación al gobierno alcanzaba al 61% (*Datafolha*). El interrogante sobre la salida a la

crisis política –además en un contexto de recesión económica– permanece abierto.

Elecciones y democracia continua

Cuando se aproximan las elecciones para consagrar la representación nacional, se configura una escena compuesta por quienes aspiran a ser gobernantes legítimos pero bajo influencia del electorado fluctuante. En la víspera se pone de relieve la disputa entre líderes que a través de actos instituyentes prosiguen en búsqueda de reconocimiento y popularidad. Pero, el peso de la ciudadanía autónoma en la constitución –y eventualmente en la decadencia– de esos liderazgos predomina por sobre el proselitismo de las redes partidarias. La realización de primarias abiertas para la selección de candidatos priva a los afiliados a partidos de la primacía en la selección de candidatos en provecho de la opinión fluctuante. Las encuestas de opinión influyen en la propia oferta de candidatos para las elecciones primarias –para avalar o descartar–, y en el transcurso de la campañas. Estas están reguladas por estrategias para constituir y ampliar un electorado. Las movilizaciones ciudadanas “contrademocráticas” favorecen desplazamientos en la opinión que suelen tener consecuencias muy significativas a la hora del voto. Es decir que la oferta política, la selección de los candidatos para las elecciones, está condicionada no solo por la medición del estado de la opinión en las encuestas, sino también por una presentificación más activa.

Aunque sus características presentes las diferencien de las del pasado, en cualquier acepción de la democracia, el ancla del régimen político es la regularidad y calidad de las elecciones. En la sociedad hay muchos juegos de poder en curso pero la elecciones son el ordenador que en principio prevalece, pues instituye autoridades legítimas. Reafirman la vigencia del principio democrático elemental; sin embargo su significación ha decaído pues no son más la exclusiva fuente de poder reconocido. El acto electoral en su nueva dramaticidad y en la eventualidad de consagrar

desplazamientos inesperados se sustenta hoy en una ciudadanía fluctuante en sus identificaciones, es decir que ha abandonado mayoritariamente el voto adscripto por pertenencia corporativa, por legado familiar o por inclusión grupal o comunitaria, en provecho de la electividad. Siendo así, el electorado fluctuante es la contracara del voto cautivo –que era un presupuesto del tradicional sistema de partidos en tiempos en que podía presumirse un caudal partidario y variaciones marginales de voto que inclinaban la balanza hacia unos u otros allí donde existía competencia entre fuerzas políticas de influencia equivalente–, y habilita la emergencia de liderazgos de popularidad en pugna, que para ser tales deben instituir la diferencia que les procure una identificación, es decir un vínculo representativo.

El electoralismo, es decir el dar primacía en la decisión al pronunciamiento de los ciudadanos, tiene un alcance social general amplio asociado a la expansión del principio igualitario; consagra decisiones y representaciones legítimas y su cuestionamiento en todos los ámbitos, pues se ha extendido a las organizaciones corporativas, asociativas y a las administraciones locales donde el ejercicio del poder prolongado y nepotista que generaba redes clientelares solía y suele aún prevalecer. La electividad que atraviesa el tejido social y connota incluso el ámbito privado y las relaciones interpersonales se asocia a la deliberación en detrimento de las identidades sustantivas y la omnipotencia de autoridades formales, y es también afín a la auto representación en el sentido más literal, pues con frecuencia se vota sin delegar o se revisa lo ya votado. Las identificaciones de pertenencia se relativizan habilitando la fluctuación y a la vez se expande un individualismo de la singularidad en el que productividad y satisfacción de costumbres, creencias e intereses de grupos de semejantes tiene como contrapartida una aspiración de trayectorias de vida y preferencias auto sustentadas, pero que pretenden reconocimiento social, pues no reniegan de solidaridades colectivas y de pertenencias, aunque éstas no son ni adscriptas ni mandatorias.

Pero en lo que se refiere a las urnas, el alcance de la legitimidad allí obtenida es acotada. Junto a los poderes de sustento electoral

se despliegan otros, de sustento legal republicano algunos –la justicia con capacidades de interpretación constitucional; poderes administrativos de control– e informales otros. De ese modo que la expansión y renovación del espacio público y la emergencia de nuevos sujetos ha repercutido en el sistema representativo promoviendo su reconfiguración.

Los partidos políticos desprovistos de rasgos identitarios nítidos y de la implantación social de otrora tienden a desagregarse deviniendo diversidad de redes pragmáticas en búsqueda de sustento ciudadano; han perdido la capacidad de fijar la agenda pública a la par de la obsolescencia de la doctrina y rumbos que los identificaban. Esas redes procuran reproducir situaciones de poder pues por lo general forman parte o se nutren del dispositivo estatal, ya sea a nivel local, de la administración nacional o de estructuras corporativas. El militante funcionario es característico de nuestro tiempo.

Son los líderes de popularidad, es decir los dirigentes que logran establecer una relación directa con los ciudadanos fluctuantes, quienes devienen en los actores principales de la escena política. Se hallan confrontados siempre al desafío de constituir y reconstituir los lazos de representación tanto más si las instancias representativas de deliberación como el Congreso se hallan desacreditadas o inhibidas por el fraccionamiento. Las escasas mediaciones establecidas entre líderes y electorado potencial permiten el ejercicio de un poder decisorio inmediato, pero a la vez hacen que los lazos de representación sean vulnerables, cambiantes. En otras palabras, el rol decisivo de los líderes de popularidad en la construcción institucional es la contrapartida de una ciudadanía en su gran mayoría sin pertenencias fijas y que, en razón de su propensión a la fluctuación en sus preferencias y a la auto representación, ha conquistado una posición central en la escena pública al devenir fuente de legitimidad siempre activa.

La oferta electoral, en particular cuando se trata de elecciones presidenciales, refleja los cambios y la reconfiguración del sistema representativo. Son los candidatos exitosos en una acción instituyente –es decir en instalar una diferencia con sentido político

respecto a otros líderes— a los que se califica como de “popularidad”. La diferencia es notoria con los partidos del pasado que pretendían representar una condición social y un proyecto específico de convalidación o bien de reforma del *status quo* y en consecuencia promovían adhesiones entre los que entendían representar. Las organizaciones y redes partidarias contemporáneas tienen un perfil cada vez más pragmático, se congregan en torno a líderes/candidatos cuya popularidad se forja en la coyuntura, formando con frecuencia coaliciones electorales sin que sus partícipes se den un programa común. Ese nuevo mundo de la política puede tener cierta instalación en movimientos sociales activos, pero aparece cada vez más enraizado en el aparato de Estado. Las intendencias, las regiones, los ministerios y otras redes estatales y los representantes o funcionarios allí instalados arbitran una logística organizacional que en el pasado era propia de los partidos políticos que contaban con militantes en buena medida voluntarios. De modo que se registran dos tipos de fluctuaciones de los involucrados en la actividad política, por una parte la de una militancia en redes partícipes de alguna experiencia, interés o aún ideal común, y por otra la de los individuos —políticos profesionales y funcionarios— que se realinean en vistas a la preservación de sus carreras.

En América Latina, en consonancia con lo descrito, los líderes articulan coaliciones para todos los niveles de representación en disputa, o bien establecen acuerdos post electorales como en el caso en Brasil, caracterizado por la fragmentación política a nivel legislativo.

Las coaliciones contemporáneas están regidas por la búsqueda de posiciones institucionales —sea de representantes o bien de funcionarios— y en sus configuraciones comanda el liderazgo de popularidad nacional, pero suele ser atenuado por liderazgos locales y redes organizacionales que coadyuvan en la competencia por el poder.

El pragmatismo de los actores políticos está alentado por una convergencia inercial hacia un discurso común “post ideológico”, pues los candidatos prometen ocuparse de “los problemas de la gente” y ello parece corresponder al debilitamiento de las

pertenencias de todo tipo, en particular las derivadas de la división social del trabajo. Ello se traduce en que la cotidianidad de los líderes está connotada por la búsqueda de proximidad ya sea por un cara a cara con los vecinos, generalmente dándole proyección a la presencia territorial a través de la TV u otros recursos audiovisuales, o bien con puestas en escena específicamente mediáticas. Ilustración de ello es la proliferación de la palabra presidencial reiterada en programas regulares como el “Aló presidente”, o esporádicos pero frecuentes, como las cadenas nacionales. En todos los casos buscando construir una imagen del líder como semejante, es decir junto al ciudadano común, pero para ello la puesta en escena tiene una diversidad de componentes que acompañan la actuación de el/la líder: la dramatización del discurso con interpelaciones y diálogos con la audiencia, la visibilización de ciertas presencias capturadas por las cámaras, la intensidad política en los recintos o fuera de ellos protagonizada por la juventud militante. Con frecuencia este vínculo directo está sellado por anuncios, es decir decisiones –presidenciales si es el caso– significativas. La voluntad popular en un acto performativo: soy el pueblo y por ello decido sin más, es decir sin la dilación de otras instancias institucionales.

En estos contextos, la divisoria de aguas “izquierda/ derecha” se hace brumosa si ya no lo era previamente. Pretende emerger circunstancialmente en dimensiones político culturales (divorcio, legalización del aborto, matrimonio igualitario, ambientalismo), aunque en verdad estas temáticas suelen coincidir imperfectamente con los clivajes del pasado. Por cierto, persiste una diferenciación significativa respecto al rol interventor del Estado y a las políticas públicas igualitarias que podría impulsar. Pero las experiencias del siglo XXI ilustran que la referencia y la acción del Estado para contrarrestar los poderes fácticos en nombre de la justicia social puede albergar proyectos de naturaleza muy variada, y en particular algunos que consagran un liderazgo y una élite política que invocando la identificación definitiva con el pueblo, procuran eternizarse en el poder haciendo de él un uso arbitrario y gozando de privilegios excepcionales. La intervención del Estado como proveedor de bienes básicos y políticas sociales y regulador del

mercado se ha expandido en la conciencia ciudadana, pero a la par de la desconfianza en las burocracias, y a veces en los propios gobernantes, sospechados unos y otros de colonizar agencias estatales en provecho de facciones.

Las elecciones son el acto democrático por excelencia y su reiteración el latido recurrente de la democracia. En América Latina, por primera vez es la única vía válida de acceso al poder. Y las elecciones libres y con una ciudadanía fluctuante se hacen tan significativas y a veces inesperadas –en el sentido de que escapan al control pretendido por variadas corporaciones y poderes fácticos– que pueden ser consideradas como mini revoluciones. Por ello mismo la regulación del acto electoral y las condiciones de la competencia han adquirido un relieve mayor; en algunos casos en la regulación y transparencia de los comicios está en juego la preservación de la democracia.

Por lo demás, la personalización política no es forzosamente un rasgo de progreso de la antipolítica. Cuando se genera un cara a cara de alternativas en sentido fuerte su encarnación circunstancial en un líder refuerza la significación política de las elecciones. Los líderes de popularidad al congregarse en coaliciones atenúan la fragmentación y al instituirse en un rol dirigente proveen un sentido general.

Estando diluida la promesa o el programa electoral, la percepción de que las elecciones proveen representantes legales con una legitimidad restringida se ve reforzada. De modo que popularidad derivada en poder concentrado y vulnerabilidad, coexisten. Los líderes de popularidad establecen relaciones directas con el electorado y otros sostenes con algún grado de organización y gozan de una gran libertad para actuar a su gusto puesto que tienen menos compromisos adquiridos con organizaciones y con pares del partido o movimiento. Buscando preservar su legitimidad pueden inducir giros y reequilibrios sin demasiadas consultas, es decir la renovación del vínculo representativo les es potencialmente más fácil. A la vez, los dirigentes políticos que no pueden devenir líderes de popularidad sólidos, es decir que tienen una audiencia limitada, fluctúan en sus lealtades, cambiando de campo o posicionándose

con frecuencia según criterios pragmáticos, en armonía con la recomposición de escenas políticas o coaliciones frecuentemente efímeras. Estas fluctuaciones de activistas y de dirigentes son intensas y suelen atravesar fronteras otrora consideradas infranqueables, aunque no se pueda hablar aún de una clase política única.

De modo que la constitución y reconstitución de los vínculos representativos en torno a liderazgos instituyentes conforma movimientos y coaliciones heterogéneas y eventualmente frágiles, incluyendo la vulnerable popularidad de la cúspide. El componente de negatividad –el rechazo de otro que puede alcanzar el grado de enemigo, sea un líder o movimiento– en la constitución de las identidades políticas emergentes es significativo y con frecuencia predominante. Aún el proyecto positivo o la afirmación propositiva suelen ser genéricas sustentando un liderazgo o proyecto de poder. Allí donde se mantienen trazos más tradicionales de identidad política, los representantes y en particular el líder ejecutivo suelen formular promesas electorales que generalmente se hacen incumplibles o irrelevantes una vez que acceden al gobierno. Las condiciones contemporáneas favorecen el pragmatismo e incluso la arbitrariedad en el ejercicio del poder. La legitimidad electoral así acotada puede, según las circunstancias, favorecer la argumentación –cuando hay descontento ciudadano activo pro deliberación– o por el contrario el decisionismo discrecional, pero es poco afín al dispositivo republicano tradicional.

Se vota y se respeta el resultado de los comicios, pero los gobernantes no retienen la plenitud de la voluntad popular. Quizás ello fue siempre así en alguna medida, sin embargo, ahora los gobernantes no pueden presuponer un sostén popular estable ni la legitimidad de los actos de gobierno por la duración de su mandato. Al día siguiente de las elecciones los ciudadanos involucrados en la vida pública –pasiva o activamente– se mantienen mayoritariamente en una posición de alerta y desconfianza hacia el poder. La opinión ciudadana es un enigma de indagación permanente de modo que la vida pública se alimenta con su figuración permanente por medio de las encuestas. Pero también se multiplican las voces públicas identificables, emergen o se

transforman en representantes no electorales, que fomentan juicios e interrogantes sobre las políticas públicas y sobre las decisiones de los gobernantes.

El estado de la opinión es virtual –medido por encuestas a veces disimiles–, pero tiende a cristalizarse en el veto de decisiones y en el estallido ante los sucesos públicos que involucran a los gobernantes, algunos de ellos reveladores de corrupción, improvisación o arbitrariedad. El freno o el veto al poder proviene de la movilización social, con frecuencia antes o en ausencia de los procedimientos institucionales (congreso, justicia) y generalmente a espaldas de las organizaciones de la oposición política.

Por cierto, la ciudadanía aun siendo fluctuante reconoce conglomerados diferenciados; en otras palabras, no puede soslayarse una variedad de condiciones ciudadanas muy distintas. Sería abusivo ignorar la diferencia entre ciudadanos organizados, audiencia y partícipes circunstanciales de una movilización, ciudadanos distantes de la comunicación política que participan solo en el momento electoral y, finalmente, quienes dan la espalda a lo que sucede por fuera de su vida personal y privada. Quien quiera enfatizar la existencia de la política organizada podrá, por sobre los diferentes segmentos, poner el foco en que uno de cada cinco ciudadanos reconoce una identificación política. Entre ellos se encuentran quienes aún pasivamente se reconocen en pertenencias heredadas o inerciales, y también franjas activas e involucradas con intensidad política.

De modo que las redes y organizaciones políticas –con una lejana semejanza con los partidos políticos tal como existieron en algunas democracias en el siglo XX y perduran debilitados y fragmentados en el inicio del siglo XXI–, existen y perdurarán pues son un componente de la puesta en forma política en vistas a gobernar. Competir y gobernar requiere de dispositivos organizacionales. Pero a diferencia del pasado no son la fuente de identificación y el principal sustento de la competencia por el poder, pues se hallan subordinadas a la lógica de la popularidad condensada en líderes; pero son necesarios y en ciertas circunstancias decisivos.

Estos casos ilustran, entre otros de América Latina y el mundo, la centralidad de una movilización ciudadana suscitada por fuera

de las organizaciones políticas y frecuentemente ajena a la vida asociativa tradicional por lo que se la califica de “espontánea”. Este atributo que no en todos los casos es pertinente, pone el foco en una sociabilidad originada en las redes de comunicación informal –particularmente las redes sociales, sitios y blogs de Internet– y en una acción entonces muy inspirada en la viralización de imágenes y noticias de la que, aún si surgen convocantes, se caracteriza al menos por la horizontalidad y la vocación asambleísta sin dirigentes sino portavoces.

Aunque no revelan un modelo tienen en común la centralidad de actores ciudadanos y populares informales y con frecuencia efímeros –por lo menos en lo que hace a una visibilidad territorial–, pero que tienen una influencia significativa en la configuración de la agenda pública y en la escena pre electoral. En algunos casos, de esas movilizaciones han surgido actores o partidos que compiten por gobernar invocando un nuevo modo de la política.

Estas expresiones “extrainstitucionales” suelen tener un origen sectorial, pero rápidamente devienen un movimiento amplio y heterogéneo en el que convergen una diversidad de rechazos hacia los gobernantes; con frecuencia alcanzan su objetivo pero tienen asimismo, como se ha visto, consecuencias amplias en la escena política. Gobiernos que habían llegado al poder con éxitos electorales significativos debieron ceder ante o verse debilitados por esos actores ciudadanos y populares, y ello pese a que en muchos casos no tenían ante sí una oposición desafiante.

Nueva ciudadanía, contestación y democracia directa

La escena no electoral es la provista por el espacio público en su dimensión más desregulada, albergando argumentos, formulación de demandas colectivas, juicios y vetos ciudadanos. Y un punto variable en nuestras sociedades contemporáneas es su vinculación o disociación con el sistema representativo.

La centralidad del espacio público, característica de la democracia continua, implica que en él se despliega una actividad política

decisiva. En otras palabras, la expresión de la voluntad popular no se agota en el acto electoral. Ese ámbito público es diverso, alberga la comunicación política y la constitución de opiniones y sujetos sociales y políticos diversos, de modo que la agenda política no proviene exclusivamente y en muchos casos prioritariamente del sistema representativo. Se despliega una sociabilidad distante de lo que Habermas calificó como “mundo de la vida” para referirse a lo que en el pasado era lo privado con epicentro en la familia y las actividades de los individuos relacionadas con sus pertenencias afectiva e intereses.

Las transformaciones que se han experimentado en las décadas recientes han puesto de relieve la circulación de argumentos y figuras que procuran instalarse como portadoras de un sentido que no se deriva simplemente de la condición social ni de las tradiciones.

En este ámbito de fluidez, los gobernantes y otros actores con capacidad de enunciación y decisión encuentran contrapesos que no son los del modelo republicano tradicional: por un lado al gobierno, o si se prefiere en un sentido más genérico al poder, y por otro a una ciudadanía que transita u oscila de la desconfianza al veto y la movilización en vistas a bloquear o revertir decisiones, o también a instalar con frecuencia un reclamo apremiante por falencias atribuibles a la ineficacia o imprevisión del Estado.

Lo que está en la base de los cambios descritos –desinstitucionalización, personalismo, cuestionamiento de la legitimidad de las decisiones ejecutivas y parlamentarias– es la expansión de una ciudadanía autónoma y en consecuencia instalada en el centro de la escena pública. Ella no es un sujeto, por el contrario constituye una arena en la que individuos y grupos fluctúan en su relación con los representantes y otros intervinientes en el espacio público, o dicho en otros términos no hay más pertenencias o adhesiones partidarias adscriptas –el Latinobarómetro registra para los años recientes que en promedio el 75% de los ciudadanos no se identifica con un partido político–. Se podría decir que la fuente de legitimidad se sustrae al control de los poderes fácticos e institucionales, a diferencia del pasado cuando la referencia era a un pueblo “inhallable” al que a la vez sus figuras parciales lo presentaban como encuadrado.

La ciudadanía no es el pueblo; ambas nociones pueden alternar en el discurso público para referirse a la fuente de legitimidad, aunque difieren en el sentido atribuido. El pueblo persiste como figura atenuada en lo que fuera potente en el pasado: el considerarlo como un sujeto potencial ilustrado por el movimiento obrero, las huelgas, los suburbios “rojos” o “nacionales y populares”, los desfiles y las concentraciones públicas. En el pasado el sujeto popular aparecía con un núcleo encuadrado y márgenes informales, pero en verdad nunca tuvo sino una figuración cambiante según los enunciadores y según el modo en que lo producían quienes querían representarlo.

En la actualidad las figuras predominantes de la voluntad popular carecen de un perfil claro que reenvíe a una base sociológica o territorial, predomina la informalidad, y cuando alcanzan pretensión de generalidad se construyen habitualmente en el espacio público en una cierta desocilogización, pues la corporeidad de la fábrica, el lugar de trabajo, la identificación territorial se diluye en provecho de una configuración propiamente pública, sea como piqueteros o una variedad de otros descontentos e indignados.

Desde la perspectiva de la democracia continua, las nuevas identidades políticas y socio-políticas –tanto los líderes y las coaliciones como los movimientos de reclamo o protesta– emergen en el espacio público por un llamamiento o por la acción espontánea, así como por movilizaciones ciudadanas bajo la figura del “cacerolazo” de protesta por la corrupción en Brasil, Chile y Argentina o por masacres intencionales o accidentes con responsabilidad pública como en México y Argentina. Lo que les proporciona más chances de escucha y de éxito que a los sujetos tradicionales, incluso si tienen una estructura organizacional consistente como es el caso del movimiento estudiantil y ciertos sindicatos de trabajadores, es su puesta en escena; en otros términos, la capacidad de hacer conocer de modo sensible el reclamo sectorial y también trascenderlo y no solo hacer valer su fuerza en términos de “daño”.

Algunos sujetos socio-políticos se constituyen directamente en el espacio público por la acción. La figura notoria es la de “piqueteros” que se dan a ver y nacen en el bloqueo de rutas

y otras vías de circulación. Frecuentemente son los activistas de una organización partidaria o activistas sociales los que lo inician. Pero, es en la ruta donde se produce un agrupamiento heterogéneo sin que se pueda identificar en la mayoría de los casos un origen o punto de partida en un lugar de trabajo o un lugar territorial. En protestas de desocupados por demanda de ayuda social o comida suelen congregarse excluidos y pobres de diferente perfil, incluidas jefas de hogar o aun jóvenes sin antecedentes laborales. La protesta arranca a los individuos de su aislamiento y de la impotencia, y es también en ese sentido que nace un sujeto –con mucha frecuencia esporádico– para la acción pública. Se puede entonces afirmar que los piqueteros existen y perduran en tanto tienen una presencia pública, y que no tenían existencia previa a la acción. Su fuerza proviene de la perturbación inmediata que producen a la circulación que afecta a quienes se encuentran en las inmediaciones, pero sobre todo por el eco multitudinario de la escena difundida por los medios de comunicación. La acción callejera puede y suele ser protagonizada por un número limitado de participantes sin proporción significativa con la cantidad de identificados con el reclamo. Los excluidos, carenciados y en suma “inexistentes” cobran existencia en la acción, devienen piqueteros y eventualmente sedimentan en organizaciones sociales. Pero en los periodos en que existe una conciencia pública sobre el reclamo o la situación denunciada, la opinión pública acompaña y ello suele repercutir en las decisiones estatales. De modo que la acción callejera interpela una audiencia ciudadana (por TV, radio y ahora comunicación digital) que acompaña pasivamente, y a veces activamente, siendo ésta una dinámica característica de la democracia continua. Algunas protestas crecen hasta alcanzar una dimensión nacional porque se hacen ver en su manifestar o incluso en el ser víctimas de la represión, y convocan por esa figuración a otros reclamantes o indignados a sumarse.

A su vez, el espacio público contemporáneo desde inicios del siglo XXI alude a una dimensión novedosa sustentada en la expansión de las tecnologías digitales. La comunicación cambia,

pero también las relaciones interpersonales y colectivas. Las redes sociales, los *blogs*, los sitios diversos en los que grupos e individuos se dan un espacio en la *web* favorecen lazos y forman colectivos de contorno variable en los que se entra y se sale continuamente. Pero no son tan solo vínculos efímeros. Se trata de una diversidad de esferas *cyber*, la mayoría conectadas las unas con las otras, en las que lo íntimo, lo privado y lo público se entremezclan bajo formas inéditas. Un verdadero espacio público –de horizontalidad, a veces asambleario– en el que los individuos se constituyen públicamente, se dan a ver. Frecuentemente en numerosos colectivos de Internet se pueden reconocer intervenciones instrumentales –es decir con una finalidad preconcebida o un propósito más o menos manipulatorio– o aún exhibicionistas, que pese a ello no inhiben una productividad colectiva. Hay sin embargo internautas más libremente comprometidos, “son los compromisos en los que las personas se incluyen los que contribuyen a revelar un interés que ellas no conocían o no podían formular inicialmente. Se dejan así redefinir por las interdependencias suscitadas para la puesta en visibilidad de sus individualidades”.

Nueva sociabilidad que constituye el soporte e incluso la fuente de los movimientos de contestación recientes en América Latina. Las redes sociales y otros recursos de Internet hicieron conocer las movilizaciones desde sus inicios cuando los medios de comunicación convencionales (prensa gráfica y TV especialmente) las ignoraban o tergiversaban. En el caso de México, en las elecciones presidenciales 2013, fueron los estudiantes quienes iniciaron la movilización, cuestionando al candidato que encabezaba las encuestas y denunciando la cobertura sesgada de la campaña electoral por las dos cadenas de TV monopólicas, pero sin transformarse en un movimiento que sostuviese a un candidato alternativo al favorito de los medios. La dura represión policial de la primera protesta capturada en video fue viralizada y entonces difundida en gran escala por la *web*, lo que despertó la sensibilidad y la simpatía de amplias franjas de la población.

Derivaciones impolíticas y cesaristas de la democracia continua

En el contexto de la democracia continua, movilizaciones ciudadanas y protestas pueden permanecer en un registro auto referencial, y en ciertos casos adoptar un repliegue identitario con una deriva impolítica.

Los movimientos que se han mencionado precedentemente, al tiempo que actuaban al margen de los partidos e incluso de la vida asociativa ordinaria, tuvieron una repercusión considerable en la escena política institucional. Sin embargo, se constata además de las protestas y estallidos nacionales mencionados, una proliferación de movilizaciones fragmentarias, también ellas al margen de los partidos o redes políticas, algunas radicalizadas en sus demandas y su identidad, y reticentes a inscribir sus demandas como parte de la agenda propiamente política y a incluirse en instancias argumentativas y deliberativas con funcionarios y representantes políticos.

Si no se establece alguna relación con el sistema representativo, la deriva impolítica puede prevalecer en estos movimientos, puesto que el poder político provee una “cuasi representación” (también en el sentido de figuración) de la sociedad, es decir provee un cuadro legal y simbólico de la comunidad política que es objeto de cuestionamiento, pero no puede ser ignorado ni descalificado en su condición de componente imprescindible de la comunidad política.

En las democracias latinoamericanas quizás más que en otras latitudes, el sistema representativo, aunque disminuido, continúa siendo junto con la Constitución Política la referencia necesaria de la vida pública. Reconocido por todos, evita que el conflicto carezca de puntos de referencia comunes a todos, puesto que cuando ello sucede el propio régimen político está en riesgo.

Como se ha argumentado, la legitimidad política proviene de centros diversos y se ha producido un desplazamiento inédito hacia la esfera pública informalizada escapando parcialmente en su dinámica a lo que fue consagrado en las elecciones. Incluso si las iniciativas políticas tienen nuevos sustentos en movimientos

constituidos en el espacio público y en las asambleas horizontales –ya sean territoriales o en la *web*–, la elección de gobernantes y de parlamentarios y el ejercicio de sus funciones es ineludible.

Se pueden concebir, y están sin duda a la orden del día, reformas del sistema representativo, no para recuperar su antiguo brillo, sino en vistas a su adaptación a las transformaciones de la democracia: una representación conectada que facilite y tome en cuenta la recurrente puesta en cuestión de la legitimidad y prevea incluso su renovación fuera de los tiempos fijos establecidos en la mayoría de los regímenes políticos. Una institucionalidad que pueda tomar en cuenta el veto ciudadano en sus decisiones y reverlas y que coexista con dispositivos que permiten albergar las deliberaciones y decisiones emergentes del dominio de la “democracia directa”. Sin embargo, este escenario predominantemente post representativo puede valorizar también la dimensión auto expresiva, es decir nutrir una vida pública reflexiva y una deliberación que no desemboca inmediatamente ni está destinada al gobierno de la sociedad.

Sin embargo no tendría sentido que este espacio público libre de restricciones a la vez que está abierto a la participación de quienes tienen vocación política no tuviese en absoluto consecuencias para la acción de gobierno.

Es decir, que otro riesgo a tener en cuenta es el de la disociación entre el sistema representativo y el ámbito de protestas y auto representaciones ciudadanas. Esta disociación haría posible –y ciertas experiencias contemporáneas en América Latina lo confirman– una deriva hacia regímenes, explícita o implícitamente, plebiscitarios; una suerte de “*ersatz*” de democracia directa abriría así la vía a una versión extrema del personalismo, el poder concentrado semi encarnado de un líder. Semi (encarnado) pues carente de una legitimidad trascendente.

De ello sigue que desinstitucionalización propia a la democracia continua puede, con su vertiente de veto ciudadano activo y de nuevo asambleísmo y sobre todo teniendo en cuenta la fragmentación política y político social, habilitar el acceso al poder de aquel líder que recoge y significa el descontento disperso en

la sociedad. Ciudadanos conectados, partícipes de la vida pública mediante las nuevas tecnologías y gozando de una nueva libertad de expresión pueden sentirse extraños y sin alternativas afines en ocasión de la elección de gobernantes y representantes e, incluso, desinteresarse por desconfianza o descreimiento de lo que está en juego en la competencia electoral. Es decir debe consignarse la expansión de una ciudadanía involucrada en los asuntos públicos en torno a nuevas agendas y nuevos espacios de actividad, eventualmente disociada o subordinada en el momento en que se configura la escena política electoral.

De este modo se instalan líderes con poca o ninguna restricción institucional, sin límites si su movimiento –como es frecuentemente el caso– carece de instancias directivas de deliberación efectiva y de dirigentes pares que fuercen al líder a consultar y argumentar.

Estos líderes devienen semi encarnados en la medida en que son los promotores de reformas sociales de anclaje institucional y sustentabilidad variable según los casos, pero de impacto muy significativo en la igualación de condiciones y la disminución de la pobreza –lo que les asigna una imagen de proveedores providenciales, puesto que estas políticas son ejecutadas generalmente sin deliberación ni participación democrática–. Su poder se refuerza porque paradójicamente al tiempo que gobiernan procuran tener e incluso encabezar el descontento “contra democrático” respecto a la clase política y hacia los poderes económicos nacionales y mundiales. Gobiernan ejerciendo un poder concentrado con frecuencia ignorando disposiciones constitucionales o legales pero sostienen explícitamente enfrentar a enemigos poderosos: las clases dominantes locales –o sucedáneos como los grandes de medios de comunicación– así como el capital financiero internacional y en medida variable a las grandes potencias.

Estos líderes semi encarnados pueden pretender, y lo enuncian habitualmente así, que ellos gobiernan pero no detentan verdaderamente el poder o que están acosados por un poder mayor, y entonces llaman a la movilización contra los enemigos del pueblo y de la nación.

Los regímenes aludidos –refundacionales o populistas– tienen en su cúspide un poder concentrado en algunos casos quizás mayor al del egócrata y suelen carecer de instancias de dirección e intermedias. Tienen el sustento de un movimiento heterogéneo instituido desde el poder, es decir que no precede el acceso al mismo, pero están inmersos en la socio-política de la democracia continua, es decir que persisten los desafíos electorales y las protestas o estallidos por fuera del dispositivo estatal.

Esta tensión atraviesa esos regímenes híbridos. Son semi encarnados por el modo en que ejercen un poder sustentado en una proclamada identificación con el pueblo y la nación, y, porque, en consecuencia, tienen vocación a permanecer en el poder, ellos y sus sucesores. Si encarnan un rumbo político en estos términos, las elecciones competitivas no pueden ser un acto en el cual el curso de esta política fundacional esté en juego. Y sin embargo, hasta ahora no han podido sustraerse a la competencia electoral aunque transformaron las elecciones generales en plebiscitos. De hecho, junto a las protestas ciudadanas, las elecciones han constituido el principal desafío a esos gobiernos y la aspiración a una suerte de fin de la política. Es decir que la dinámica política no transcurre por los canales usuales de la democracia liberal –el Congreso y otras instancias más características de lo que hemos denominado representaciones públicas no electorales–.

Los movimientos en torno a liderazgos fundacionales son, como se ha visto, heterogéneos y en cada caso nacional con características bastante distintas entre sí. Todos ellos capitalizan descontentos varios de democracias limitadas con exclusión social y de las políticas “neoliberales” practicadas en los años noventa. Pero los descontentos dan lugar a una convergencia variada y circunstancial. Los movimientos refundacionales esgrimen rechazo o negatividad en relación al pasado que les precedió, impulsan políticas distributivas efectivas y, en algunos casos, instancias de participación popular y también políticas nacionalistas que revirtieron el achicamiento del Estado y sus recursos que se había producido en los años noventa, pero también actúan con gran pragmatismo, ocasionalmente exitoso. No puede considerarse

que hayan –ni en su conjunto ni caso por caso– configurado un modelo, pero sí una experiencia sin duda marcante para sectores populares y excluidos que no puede ser plasmada en principios políticos de gobierno. Esta es la clave y el *impasse* del poder semi encarnado, la unidad heterogénea de un movimiento que pondera o idealiza una experiencia de gobierno y de movilización social que se cristaliza en el/la líder y en su nombre. Ello cuenta en el momento de sucesión pues en el cuerpo y el nombre se condensan las convergencias que son variadas, con frecuencia contradictorias entre sí y en gran medida irrepetibles. No hay un manifiesto ni una organización unificada que pueda asegurar la continuidad de proyectos nacionales y populares absolutos. El momento de la renovación o de la sucesión del líder desencadena una inevitable crisis y probablemente la finalización de la experiencia.

En consecuencia los líderes fundacionales o populistas como algunos los llaman no pueden ser reemplazados. E incluso cuando se imagina una sucesión se procura presentarla en términos de filiación real o figurada; en términos imaginarios, la misma sangre para preservar la unidad de los orígenes.

Bibliografía

- Avritzer, Leonardo 2015 “Eleições, radicalização política e revolta social: uma análise do Brasil entre as eleições de 2014 e os painéis de 2015”, en este volumen.
- Cardon, Dominique y Granjon, Fabien 2010 *Mediactivistes*, París: Les Presses Science Po.
- Cuvi, Juan y Muñoz, Francisco 2014 “Análisis político del proceso electoral del 23-F”, en *La línea de fuego*, 7 de abril.
- Damill, Mario y Frenkel, Roberto 2011 “Macroeconomic policies and performances in Latin America 1990-2010”, Buenos Aires: Cedes.
- Fernando L. García Yapur 2015 “Elecciones subnacionales: ‘hegemonía incompleta’ y nuevo pluralismo”, documento de discusión FES-Bolivia, inédito.

- Gonçales Couto, Claudio 2015 “2014 e o futuro do PT: Novas Eleições Críticas?”, en *Interesse Nacional*, Año 7, Núm. 28, enero-marzo.
- Habermas, Jürgen 1994 *Teoría de la acción comunicativa*, Madrid, Cátedra.
- Mair, Peter 1997 *Party system change*, Oxford: Oxford University Press.
- Mayorga, Fernando 2014 *Incertidumbres tácticas. Ensayos sobre democracia, populismo y ciudadanía*, La Paz: Plural Editores.
- Mayorga, Fernando 2015 “Efectos políticos de las elecciones subnacionales”, 12 de abril, inédito.
- Ospina Peralta, Pablo 2014 “Radiografía de un remezón—Informe de coyuntura”, Quito , Comité ecuménico de proyectos, marzo.
- Rosanvallon, Pierre 1998 *Le peuple introuvable*, Paris: Gallimard.
- Rosanvallon, Pierre 2006 *La contredemocratie*, París: Seuil.
- Rosanvallon, Pierre 2009 *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad*, Buenos Aires: Manantial.
- Rousseau, Dominique 1995 *La démocratie continue*, París: Bruilant